

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
SECCIÓ 3^a**

Recurs d'apel·lació núm. 67/2017

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 335/2013

Apel·lant: CAMIER DOSMIL, S.L

Representant de l'apel·lant: SR. [REDACTED], Procurador

Apel·lat: IL·LM. AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Representant de l'apel·lat: SR. [REDACTED], Lletrat
consistorial

Coapel·lada: COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS, S.A

Representant de la coapel·lada: SR. [REDACTED], Procurador

S E N T È N C I A núm. 1094

Magistrats/ades:

IL·LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL·LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL·LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 27 de decembre de 2018.

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3^a), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l'art 117.1 de la Constitució, ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel·lació núm. 67/2017, promogut per CAMIER DOSMIL, S.L – representada pel Procurador SR. [REDACTED] i assistida pel Lletrat SR. [REDACTED] -, essent l'apel·lat L'IL·LM. AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA –representat i assistit pel Lletrat consistorial SR. [REDACTED] - i la coapel·lada la mercantil COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS, S.A – representada pel Procurador SR. [REDACTED] i assistida pel Lletrat SR. [REDACTED] -.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il·lm. Sr. Héctor García Morago, el qual expressa el parer de la Sala.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER: En el sí del procediment ordinari núm. 335/2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona dictà la Sentència núm. 239, de 17 de novembre de 2016, amb el veredictes que segueix:

“Desestimar el recurso promovido por CAMIER DOS MIL, S.L. contra AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA en el que ha comparecido como codemandada la mercantil COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS, S.A., sin costas.”

SEGON: Disconforme amb la decisió que hem transcrit, l'actora deduí apel·lació en temps i forma, a la qual s'hi oposaren les parts demandades.

TERCER: Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel·lació i, un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà finalment el dia 18 de desembre de 2018 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART: En la tramitació d'aquest recurs d'apel·lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER: Tal com ja hem expressat, en el sí del procediment ordinari núm. 335/2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona dictà la Sentència núm. 239, de 17 de novembre de 2016, amb el veredictes que segueix:

“Desestimar el recurso promovido por CAMIER DOS MIL, S.L. contra AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA en el que ha comparecido como codemandada la mercantil COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS, S.A., sin costas.”

Aquest veredictes va venir precedit dels fonaments jurídics que passarem a transcriure:

“PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la desestimación presunta de la solicitud formulada en fecha 30 de mayo de 2013 relativa al pago de las obras de urbanización anticipadas.

SEGUNDO.- El objeto de esta litis es la desestimación presunta de la solicitud de pago de las obras de urbanización anticipadas del Sector 21 del Plan general de ordenación urbanística de Sant Andreu de la Barca, formulada por la mercantil actora el 30 de mayo de 2013.

En primer lugar, debe advertirse que ha sido expresamente admitido por la actora en su escrito de conclusiones que el importe que inicialmente reclamaba de 2.311.493,07 euros no es ajustado a derecho, por cuanto el importe máximo en concepto de gastos por la ejecución de obras de urbanización anticipadas en el sector 21 debe establecerse en 2.200.000 euros.

En efecto, la sentencia número 186/09, de 29 de junio de 2009, del Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona y la posterior sentencia de 23 de junio de 2010, de la Sala Contencioso Administrativa del TSJC que la confirma reconocen que la actora realizó una serie de obras de urbanización en el Sector 21 y las enumera y que estas obras generaron unos gastos por importe de 2.200.000 euros.

En segundo lugar, las citadas sentencias señalan que el importe de dichas obras debía reflejarse en la cuenta de la liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación. El fundamento jurídico sexto de la sentencia del JCA número 9 así lo expone:

Por lo que respecta a las obras de urbanización no existe duda alguna que en el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad Anmamaisa, SA el 28 de abril de 2000 para el desarrollo y gestión del sector 21 del Plan General de ordenación de Sant Andreu de la Barca se estipuló que a totalidad de los honorarios devengados por los trabajos encargados a Anmamaisa, SA y soportados supondrá un crédito total a su favor, o en su caso a favor de Camier Dosmil SL o de quien en aquel momento sea propietario a compensar por las cargas que como propietario de parte del Sector 21, le

correspondan en concordancia a su coeficiente de participación que resulte del proyecto de reparcelación. Presentados los gastos al Ayuntamiento este acordó el 27 de agosto de 2003 establecer que los gastos de urbanización anticipadas del sector 21 del PGO realizadas por Camier Dosmil S.L: ascienden a la cantidad de 1.077,02 euros IVA incluido cantidad que tiene condición de provisional y a cuenta hasta la aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación del Polígono, así como compensar esta cantidad por las cuotas urbanísticas que como propietario resulten del Proyecto de Reparcelación del sector 21, en el coeficiente de participación que le corresponda.

Consecuentemente estos gastos deben ser repercutidos entre los diferentes adjudicatarios en proporción al valor de las fincas y ello en la consideración que la totalidad del sector 21, deviene beneficiada de esa actuación urbanística.

Se ha comprobado que los trabajos realizados consistieron en el derribo de las naves industriales existentes, el soterramiento y entubamientos del Canal Sedo que exigieron el desecado y la excavación de la zanja de dicho canal para encauzarlo en un tubo especial rectangular; la instalación de servicios, como albañales estación transformadora, conducciones eléctricas de la urbanización así como la construcción de la vía peatonal, sobre el enterramiento de dicho canal, cuya parte inferior se utiliza como parking fue completado encontrándose todas las instalaciones hoy en día funcionando. Consecuentemente no se puede obviar ya no solo la realización de las obras sino los gastos que generaron y que además el Ayuntamiento reconoció por eso, no le es dable negar tal evidencia so pena de incurrir en ir contra los propios actos, facturación y gastos de gestión y que asciende junto con el justificante de los gastos aportados por Camier Dosmil SL al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca el 26 de Julio de 2004 la cantidad de 2.200.00 euros cantidad que junto con los intereses debe reflejarse en la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación, prueba concluyente junto con la realidad de las obras, careciendo de sentido la impugnación que hace el Ayuntamiento rayano a lo absurdo en cuanto que la entidad actora no ha aportado las facturas ni los justificantes de pago.

Y el fundamento jurídico sexto de la dictada por el TSJC refiere:

"Por otro lado, la sentencia apelada ha puesto manifiesto en base a la prueba pericial, la realidad de la existencia y utilidad de las obras de urbanización realizadas por la actora, para cuya valoración el perito procesal ha cotejado las facturas que le ha presentado el promotor concluyendo que ascienden a 2.873.056,49 euros (la sentencia en el fundamento sexto ciñe la cantidad a 2.200.000 euros seguramente por congruencia con lo pedido en la demanda);..."

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta el Convenio urbanístico suscrito entre la sociedad ANMAMAISA (propietaria de la finca denominada Cervelló), la mercantil actora (titular de un derecho de opción de compra sobre la misma) y el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, en virtud del cual se habilitó a la recurrente para contratar la redacción del PERI Sector 21, así como los instrumentos de gestión necesarios para su desarrollo y ejecutar anticipadamente las obras de urbanización necesarias para la puesta en funcionamiento de un centro lúdico y comercial proyectado. La estipulación cuarta del mismo es del tenor literal siguiente:

"QUARTA.- La totalitat dels honoraris devengats pels treballs encarregats per ANMAMAISA, SA i suportats suposarà un crèdit total al seu favor -o en el seu cas a favor de CAMIER DOS

MIL SL, o de qui en aquell moment sigui propietari- a compensar per les càrregues que com a propietari de part del sector 21 li corresponguin, en concordança amb el seu coeficient de participació que resulti del Projecte de Reparcel·lació. "

El artículo 1281 CC obliga al intérprete a estar, en primer lugar, al sentido propio o literal de las palabras o cláusulas si sus términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes. En segundo lugar, entrarían en juego las restantes reglas de los artículos siguientes, que vienen a funcionar con carácter subsidiario. Así, el artículo 1282 establece: *"Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato."* El artículo 1284 señala: *"Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto."* Por su parte, el artículo 1285 determina: *"Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas."* Y el artículo 1286: *"Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato."*

En nuestro caso, de acuerdo con las consideraciones antes referidas, debe concluirse que los términos de la cláusula 4ª son claros por lo que no debe acudir al resto de normas antes referidas. Y de dichos términos puede desprenderse que se trata de un crédito a favor de la actora *"o de qui en aquell moment sigui propietari"*. Así lo ha entendido la sentencia dictada en apelación por el TSJC, antes citada, en cuyo fundamento jurídico sexto expone:

"En consecuencia queda probado el interés de la actora en el pleito por más que la liquidación y las compensaciones se realicen con quien resulte propietario de la finca, quedando en la esfera civil los pactos privados al respecto."

A su vez, de acuerdo con la estipulación cuarta del convenio, este crédito se deberá *"compensar per les càrregues que com a propietari de part del sector 21 li corresponguin"*. Así, también, ha sido entendido la sentencia de constante cita, dictada por el JCA número 9, al señalar que:

"Consecuentemente estos gastos deben ser repercutidos entre los diferentes adjudicatarios en proporción al valor de las fincas y ello en la consideración que la totalidad del sector 21 deviene beneficiada de esa actuación urbanística."

(...)

Consecuentemente no se puede obviar ya no solo la realización de las obras sino los gastos que generaron y que asciende junto con el justificante de los gastos aportados por Carrier Doslil SL al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca el 26 de Julio de 2004 la cantidad de 2.200.000 euros cantidad que junto con los intereses debe reflejarse en la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación..."

Y de hecho, dicho importe así fue incluido según refiere la página número 5 de la Memoria del Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente el 4 de octubre de 2011.

En definitiva, la compensación se deberá efectuar en el marco del Proyecto de Reparcelación y en su cuenta de liquidación provisional, reconociendo el derecho de quien sea el propietario de la finca 75 a compensar las cargas urbanísticas con el importe abonado por Carrier Dosmil, SL de 2.200.000 euros. Es decir, este importe debe servir para compensar las cargas urbanísticas, que según la cuenta de liquidación provisional se asignen a la finca 75 del Proyecto de Reparcelación del sector 21.

De hecho, este planteamiento coincide con el defendido por la actora en el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 28 de junio de 2012, dictado por el JCA número 9 que resuelve no haber lugar a acordar la ejecución de la sentencia del TSJC núm. 551/2010, de 23 de junio, confirmatoria de la sentencia número 186/2009 de 29 de junio de 2009. Así lo refiere la sentencia dictada por el TSJC número 376/2013, de 10 de mayo señalando que en el petitum del recurso de apelación la actora solicita:

" 2b) reconocer el derecho de crédito de 2.200.000 euros a favor de Carrier Dosmil, SL y que se aplique el mismo, de forma proporcional a todas las fincas/departamentos de la finca 75 (adjudicadas a Coperfil Group, SA) de la cuenta de liquidación provisional "fins assolir un ròssec de 0 euros per cada identitat, procedint-se a liquidar a favor de Carrier Dosmil SL el diferencial que romangui respecte dels costos que resultin del compte de liquidació provisional".

De acuerdo con los fundamentos anteriores procede desestimar el recurso interpuesto.

TERCERO.- A tenor de los artículos 68.2 y 139.1 de la vigente ley jurisdiccional, modificado el último por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, las costas procesales se impondrán en primera o única instancia a la parte que haya visto rehusadas todas sus pretensiones en la sentencia o en la resolución del recurso o del incidente, excepto que se aprecien y así se razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho de derecho.

En el caso que nos ocupa se considera que, ciertamente, el supuesto presentaba serias dudas de derecho, lo que justifica la no imposición de las costas a pesar de la íntegra desestimación de la demanda."

Importa destacar que les pretensions de l'avui apel·lant apareixien definides en l'antecedent primer de la Sentència de la forma següent:

"En fecha 7 de febrero de 2014 la actora presentó escrito de demanda. En este escrito solicita que se dicte sentencia por la que con estimación del presente recurso, se declare:

"PRIMERO.- Que el acto recurrido, consistente en la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de pago de las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a mi mandante, resultantes de lo estipulado en el Convenio suscrito en fecha 21 de abril de 2000, es contrario al ordenamiento jurídico.

SEGUNDO.- Que, consecuentemente, debe anularse y dejarse sin valor ni efecto alguno.

TERCERO.- Que en aplicación de las estipulaciones cuarta y sexta de dicho Convenio debe reconocerse el derecho de mi mandante a percibir, sin más dilación, las cantidades de 122.493,07 euros y 2.200.000 euros más el IVA correspondiente, así como los intereses devengados desde la

fecha de aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación hasta el completo pagò de dichas cantidades.

CUARTO.- Que se condene al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a ejecutar el pago de dichas cantidades sin perjuicio de la compensación que pudiere efectuar de la cantidad de 174.225,65 euros de la que resulte acreedor en méritos de lo dispuesto en la estipulación octava del mismo Convenio.

QUINTO.- Que se conde al pago de las costas causadas por el presente proceso al Ayuntamiento habida cuenta la temeridad y mala fe acreditada en la negativa infundamentada a proceder a dicho pago."

SEGON: L'actora i ara apel·lant ha sol·licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentència *a quo* i, alhora, l'estimació del recurs deduït en primera instància. I ho ha fet amb un conjunt d'arguments que resumirem així:

1: CAMIER 2000, S.L (en endavant CAMIER) avançà obres d'urbanització per valor de 2.200.000 euros (o, si més no, es va fer càrrec d'aquest cost).

Amb l'Ajuntament es pactà que aquesta despesa assumida per l'ara recurrent es prendria en consideració en el sí del projecte de reparcel·lació del Sector 21 (PR) com a càrrega de la comunitat reparcel·latòria, sens perjudici de tenir-la present per tal de compensar les quotes d'urbanització a satisfer per la mercantil CAMIER en proporció a la seva quota de participació.

2: Com sigui que CAMIER ha perdut la condició de membre de la comunitat reparcel·latòria en haver venut el sòl de la seva propietat, té dret a recuperar els 2.200.000 euros esmentats anteriorment, amb interessos.

3: No obsta al pagament de les susdites quantitats el fet que, en esdevenir anul·lat judicialment el PR aprovat l'any 2011, l'Ajuntament hagi preparat un nou PR, consignant en el mateix un dret de crèdit a favor de CAMIER.

TERCER: L'IL·LM. AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA (en endavant, L'AJUNTAMENT) ha sol·licitat la desestimació de l'apel·lació amb arguments essencialment coincidents amb els de la Sentència d'instància. En aquest sentit, ha portat a col·lació el conveni al qual ens referirem més endavant; ha exposat els problemes de gestió econòmica que

podria comportar l'haver d'atendre les pretensions de l'apel·lant; i ha manifestat la seva predisposició a regularitzar la situació a cavall del nou PR que s'està tramitant.

QUART: La codemandada COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS, S.A (en endavant, COPERFIL) també s'ha oposat a l'apel·lació formulada per CAMIER amb arguments similars als de L'AJUNTAMENT. I alhora, ha aprofitat l'avinentessa per tal d'intentar adherir-se a l'apel·lació. D'adherir-se per tal de veure ampliat a altres finques de la seva propietat (adquirides de CAMIER) l'abast de l'operació compensatòria associada a les obres avançades en el seu dia per l'ara apel·lant principal. Adhessió a l'apel·lació que ha suscitat l'oposició del Consistori apel·lat, la defensa jurídica del qual ha considerat que es tractava d'una maniobra processalment inoportuna.

CINQUÈ: Haurem de començar per rebutjar sense pal·liatius l'adhessió a l'apel·lació promoguda per COPERFIL.

Primerament, perquè COPERFIL actuà en primera instància com a "codemandada", a l'empara de l'art. 49.1 LJCA i, com a tal part "demandada", només es trobava legitimada per tal de defensar l'adequació a dret dels actes administratius concernits. Si aquests actes presentaven alguna mancança o algun vessant contrari al seus interessos i el volia posar en entredit, tenia la càrrega de fer-ho mitjançant la interposició –en temps i forma– d'un recurs contenciós administratiu.

I segonament, perquè la conducta processal de COPERFIL en primera instància la inhabilitava encara més per tal d'adherir-se a l'apel·lació. Per tal d'adherir-se amb la finalitat de fer valer en segona instància arguments i pretensions que no va portar a col·lació davant el Jutjat *a quo*.

En l'anterior sentit, no estarà de més recordar que COPERFIL va rebre l'emplaçament previst a l'art. 49.1 LJCA el dia 26 de novembre de 2013 i, malgrat això, no es personà en el procés fins a una data (el 12 de maig de 2016) posterior a la de conclusió de les actuacions. De conclusió de les

actuacions amb passí de les mateixes al titular de l'òrgan jurisdiccional per tal de dictar Sentència.

SISÈ: Tampoc podrà prosperar l'apel·lació deduïda per CAMIER.

En la tessitura en la qual ens trobem, resulten irrellevants els pronunciaments adoptats amb anterioritat per aquest Tribunal amb motiu dels recursos i incidents deduïts per CAMIER a resultes de la versió del PR aprovada definitivament per L'AJUNTAMENT l'any 2006. Aquesta versió del PR fracassà; i el mateix succeí amb la versió aprovada definitivament l'any 2011; i ara, d'allò que es tracta, és de determinar si la liquidació d'una aportació en obres avançades, valorades en 2.200.000 euros, es pot produir o no amb independència d'un procés reparcel·latori que encara no ha conclòs, atès que com a conseqüència dels pronunciaments judicials acumulats fins a la data, L'AJUNTAMENT s'ha vist en la tessitura d'haver de tramitar un nou PR.

En realitat, no ens hem vist en aquest plet posats en la necessitat de pronunciar-nos sobre allò que haurà de dir o de particularitzar l'instrument reparcel·latori amb motiu de les obres avançades a les quals ens acabem de referir. D'aquest Tribunal només s'ha demanat un pronunciament sobre:

Primer: Si L'AJUNTAMENT te l'obligació de pagar o reintegrar els 2.200.000 euros (amb interessos) que van costar les obres avançades i, en cas de resposta positiva,

Segon: Determinar si ha de ser CAMIER la perceptora directa d'aquesta suma.

I posats en aquesta tessitura, aquest Tribunal haurà de confirmar el criteri del Jutjat d'instància: l'import reclamat per CAMIER haurà de romandre associat a un expedient reparcel·latori que és viu i que es troba en tramitació. Per tant, les operacions de compensació i, en el seu cas, de devolució de romanents relacionades amb les obres avançades, hauran de supeditar-se a l'aprovació definitiva del nou PR. I la raó és molt clara i cal vincular-la al conveni urbanístic subscrit en data 28 d'abril de 2000 per L'AJUNTAMENT;

per ANMAMAISA, S.A com propietària, aleshores, dels terrenys concernits; i per CAMIER en qualitat de titular d'una opció de compra i, per tant, de futura propietària dels terrenys.

Es tracta d'un conveni vigent (no ens consta que CAMIER hagi promogut accions per tal d'instar la seva resolució o rescissió). D'un conveni a través del qual es pactà que l'import de les despeses suportades per la propietat (suportades per tal d'assolir un determinat grau d'urbanització avançada, en benefici propi principalment), generarien un crèdit a favor d' ANMAMAISA, S.A i en el seu cas de CAMIER *o de qui resultés propietari arribat el moment*, el qual crèdit es compensaria amb les càrregues que el propietari dels terrenys hauria d'assumir en el sí del PR.

Doncs bé, en no haver-se produït de forma efectiva o eficaç l'esdeveniment desencadenant del mecanisme de compensació pactat lliurement a través del conveni (recordem que el procediment que haurà de concloure amb un PR ajustat a dret encara no ha conclòs), de moment no serà possible cap desplaçament patrimonial que pugui posar en crisi o en entredit l'operativa contemplada en el conveni urbanístic de l'any 2000. Conveni que, com ja hem dit, segueix vinculant CAMIER com a signatària del mateix.

Aquestes són, val la pena recordar-ho, les peculiaritats de "l'urbanisme concertat".

SETÈ: Atès allò que disposa l'últim incís de l'art. 139.2 LJCA, no s'imposaran costes, perquè en bona mesura la complexitat inherent al conflicte hauria propiciat el recurs a la segona instància.

DECISIÓ:

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3^a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya **HA DECIDIT:**

1: **DESTIMAR** el present recurs d'apel·lació núm. 67/2017, promogut per CAMIER DOSMIL, S.L, amb l'oposició de L'IL·LM. AJUNTAMENT DE

SANT ANDREU DE LA BARCA i de COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS, S.A i, ahora, REBUTJAR l'adhessió a l'apel·lació deduïda per COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

2: CONFIRMAR la Sentència núm. 239, de 17 de novembre de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm. 335/2013.

Sense imposició de costes.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l'art. 89 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l'expressat art. 89 (punt 2) LJCA i només podrà fonamentar-se en la vulneració del dret estatal o europeu. En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

No hi cabrà, en canvi, recurs de cassació davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fonamentat en l'eventual vulneració del dret autonòmic, en equiparar-se, en aquest cas, les Sentències dictades per la Sala del Tribunal Superior, a les dictades per la Sala 3^a del Tribunal Suprem en el seu propi àmbit (Resolucions interlocutòries de 10 de maig de 2017, entre d'altres, dictades per la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya, en els recursos de cassació autonòmica núm. 3/2017 i 8/2017).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel·lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes als efectes de les diligències processals que siguin pertinents.

PUBLICACIÓ.- El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.